

EDITORIAL

Aparecer, no hay dobles lecturas en las autoridades de gobierno y congresistas respecto de la utilidad de la implementación del Estado Excepción en la Macrozona Sur. Y es que la evidencia habla de una baja ostensible de hechos vinculados a la denominada violencia rural en dicho territorio que, en el caso de la Región, abarca zonas de Arauco y Biobío.

Esos sí, la medida impuesta desde el primer semestre de 2022, sin pausas, hasta hoy, igual ha sido protagonista en diversos momentos de críticas de diversos sectores políticos.

Sin ir más lejos, durante la última campaña presidencial, mientras algunos planteaban su mantención, dado sus resultados, otro, incluso, plantearon recrudecer y reemplazar por otro, más duro, dicho procedimiento.

Y, hoy, a poco menos de dos meses de que asuma el poder el presidente electo José Antonio Kast, actores políticos y sociales del Biobío plantearon la necesidad de que el Estado de Excepción se mantenga, tras su asunción en La Moneda.

Kast situó la seguridad como uno de los ejes centrales de su propuesta programática. En ese contexto, fue particularmente crítico del uso que el actual Gobierno ha hecho del Estado de Excepción en la Macrozona Sur, sosteniendo que su prolongación ha sido "inusual e injustificada", lo que a su juicio demostraría

Estado de excepción permanente



Los cuestionamientos persisten respecto de que se trata de una medida transitoria, pero que se ha transformado en permanente. En ese contexto, la decisión final le corresponde al futuro gobierno, a partir de marzo.

una claudicación frente a la violencia. Sin embargo, el ahora próximo Mandatario fue enfático en señalar que no descartaría recurrir a esta herramienta constitucional en escenarios que calificó como de "guerra interna", especialmente tras hechos de alto impacto, como el asesinato de tres carabineros en la comuna de Cañete en abril de 2024.

Desde la CPC Biobío, plantean que se hace necesario seguir con la medida, mientras no se definan otras opciones que aseguren la seguridad de la zona. También, desde los contratistas forestales se plantea la mantención del Estado de Excepción, al igual que Corma.

Lo mismo, de acuerdo con nota publicada por Diario Concepción, aseguran congresistas de la zona, quienes en su mayoría mencionan que es necesario, pero explican que deben aplicarse otras acciones que erradiquen los problemas asociados a violencia rural.

En suma, si bien esta herramienta ha sido útil para disminuir las cifras de ilícitos en la Macrozona Sur, los cuestionamientos persisten respecto de que se trata de una medida transitoria, pero que se ha transformado en permanente. En ese contexto, la decisión final le corresponde al futuro gobierno, a partir de marzo.